



Frente común para reducir el impacto negativo que genera la economía sumergida

Expertos de la Administración, el asociacionismo y la empresa reclaman más inspecciones para frenar el fraude fiscal y laboral

BENITO MAESTRE

MURCIA. Se estima que la economía sumergida en la Región de Murcia alcanza un montante económico que oscila entre los 5.600 y los 6.900 millones de euros al año, según el estudio 'Economía sumergida e irregularidades laborales en la Región de Murcia',

elaborado gracias a la colaboración de la Universidad de Murcia (UMU), el Consejo Económico y Social (CES) y el Gobierno regional. Este fraude fiscal y laboral supone un golpe de efecto al Producto Interior Bruto (PIB) regional, socavando al mismo tiempo el mantenimiento de los servicios públicos, la competitividad de las empresas y la precariedad laboral.

Entre los sectores más afectados por la actividad económica no declarada figuran la hostelería y el servicio doméstico. Por su parte, en los colectivos que todavía se ven afectados por las ilegalidades laborales estarían los extranjeros, los jóvenes de entre 16 y 24 años, los que realizan tra-

bajos temporales de entre uno y tres meses y las personas con escasos estudios.

Para poner coto a esta situación, el Gobierno regional está ya elaborando un nuevo plan estratégico contra la economía sumergida, junto con la patronal empresarial y los sindicatos, que se basará en tres ejes: la coordinación interadministrativa, el enfoque multisectorial y las medidas correctoras y preventivas.

Ayer se celebró en LA VERDAD un desayuno informativo bajo el título 'Economía sumergida: Hacia una economía transparente, justa y competitiva' en el que participaron expertos regionales para abordar cuestiones claves y arrojar luz en este ámbito. El encuen-

tro, moderado por el periodista David Gómez, reunió a Juan Marín, director general de Trabajo; Francisco Casado, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Murcia; José

La actividad no declarada supera el presupuesto de la Comunidad Autónoma

Noroeste-Río Mula y Guadalentín son las zonas con mayor incidencia de estas irregularidades

Miguel Marín, presidente de la asociación agraria COAG-IR, y Gema del Cerro, directora de Recursos Humanos de Limcamar. Este encuentro está organizado por LA VERDAD y el Gobierno de la Región de Murcia, a través del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

Todos a una
La transparencia gana enteros y se impone a la ilegalidad

Juan Marín insistió en que la economía sumergida es un tema que afecta a todo el tejido productivo y que es prioritario tomar carta en el asunto para amortiguar su impacto, que es doble. Por un lado, el económico, pues representa el 17,4% del PIB autonómi-